



Número de Índice AI: AMR 49/0448/2019

Fecha: 28/05/2019

## CARTA ABIERTA A KEITH CHRISTOPHER ROWLEY, PRIMER MINISTRO DE TRINIDAD Y TOBAGO

Señor Primer Ministro:

Me dirijo a usted en nombre de Amnistía Internacional para dar la bienvenida al reciente anuncio de la apertura de un proceso de registro para personas migrantes y refugiadas de Venezuela en Trinidad y Tobago, y para solicitar más información sobre la propuesta de su gobierno.

### *La situación de los derechos humanos en Venezuela*

Como quizá haya observado, este mismo mes Amnistía Internacional publicó el más reciente de una serie de informes sobre Venezuela, titulado *Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela*.<sup>1</sup> En él se analiza con detalle como las ejecuciones extrajudiciales selectivas, detenciones arbitrarias, muertes y lesiones causadas por las autoridades venezolanas haciendo uso excesivo de la fuerza, o por personas o grupos de personas que actúan con la autorización, el apoyo o la aquiescencia de las autoridades venezolanas, pueden constituir crímenes de lesa humanidad y requieren una respuesta urgente de la comunidad internacional.

Esta situación, así como el grave deterioro de las condiciones de vida y la violación sistemática de los derechos económicos, sociales y culturales, han obligado a más de 3,7 millones de personas a huir de Venezuela. Asimismo, menos 3 millones más están en otros países de Latinoamérica o el Caribe y necesitan protección internacional.

### *La población venezolana necesita protección internacional*

En septiembre de 2018, en nuestra carta<sup>2</sup> a los presidentes de toda América Latina y el Caribe, pedimos a los Estados de la región que, ante las violaciones masivas de derechos humanos en Venezuela, permitieran el acceso sin trabas a sistemas internacionales de protección como el Estatus de Refugiado y otros mecanismos complementarios, que aceleraran el acceso de las personas venezolanas a una residencia legal con garantías adecuadas, y que se adhirieran estrictamente y respetaran el principio de no devolución (*non-refoulement*). Asimismo, pedimos a los Estados que facilitaran el acceso de las personas venezolanas a los servicios públicos, respetando en particular su derecho a la salud, a la educación y al trabajo.

Hace sólo unos días, el ACNUR actualizó su nota de orientación para la población venezolana, donde especifica que la mayoría de las personas que han huido de Venezuela necesitan protección internacional.<sup>3</sup> Señor primer ministro, la inmensa mayoría de las personas que huyen de Venezuela no son “migrantes económicos” ante los cuales su gobierno deba “proteger [los] intereses de la población de Trinidad y Tobago”, como ha afirmado en una conferencia de prensa reciente,<sup>4</sup> sino personas necesitadas de protección internacional que huyen de una situación en la que su vida, su seguridad o su libertad corre peligro.

### *Respuesta de Trinidad y Tobago*

<sup>1</sup> Amnistía Internacional, “Hambre de justicia: crímenes de lesa humanidad en Venezuela” (AMR 53/0222/2019); Véanse también: Amnistía Internacional, “Salida de emergencia”, <http://www.amnistiaonline.org/SalidadeEmergencia/>; Amnistía Internacional, “Diez cosas que debes saber sobre la crisis de derechos humanos en Venezuela”, 4 de marzo de 2019, disponible en:

<https://www.amnesty.org/es/latest/news/2019/02/10-things-you-need-to-know-about-venezuelas-human-rights-crisis/>

<sup>2</sup> Amnistía Internacional, *Medidas urgentes: personas venezolanas necesitan protección internacional* (AMR 01/9019/2018).

<sup>3</sup> ACNUR, “La mayoría de las personas que huyen de Venezuela necesitan protección como refugiadas”, 21 de mayo de 2019, y “Nota de orientación sobre consideraciones de protección internacional para los venezolanos. Actualización I”, disponible en:

<https://www.refworld.org/es/docid/5ce2d44c4.html>

<sup>4</sup> CNC3, “Post cabinet news conference”, disponible en : <https://www.facebook.com/CNC3Television/videos/445470876029049/>



En este contexto, Amnistía Internacional reconocemos la decisión de Trinidad y Tobago de ofrecer soluciones para que las personas venezolanas puedan obtener la residencia legal. Sin embargo, Amnistía Internacional tiene algunas dudas respecto al proceso de registro propuesto por el gobierno, según la escasa información publicada.<sup>5</sup>

Según los informes, hay aproximadamente 40.000 personas venezolanas en Trinidad y Tobago, si no más.<sup>6</sup> Según información gubernamental, el periodo de registro propuesto sólo durará dos semanas, del 31 de mayo al 14 de junio de 2019, y se inscribirán unas 28.000 personas.<sup>7</sup> A Amnistía Internacional le preocupa que el plazo propuesto probablemente sea demasiado breve para inscribir a tantos posibles solicitantes, y desearía recibir más información sobre cómo pretende su gobierno tramitar tal número de solicitudes en tan poco tiempo, y cómo piensa salvaguardar la confidencialidad de los datos de quienes se registren y garantizar que no caen en manos de las autoridades venezolanas. Asimismo, nos gustaría disponer de más información sobre qué pasará con las personas migrantes y refugiadas que no consigan inscribirse en ese plazo.

Aunque Amnistía Internacional felicita a los Estados que proponen alternativas para que personas venezolanas obtengan la residencia legal, el proceso de registro propuesto por Trinidad y Tobago no le exime de la obligación de respetar los derechos de quienes solicitan asilo, en virtud de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados (1951) y su Protocolo (1967).

Según el ACNUR, que lleva a cabo procedimientos de determinación de la condición de refugiado en Trinidad y Tobago, en enero de 2019 había 7.600 personas solicitantes de asilo venezolanas en el país.<sup>8</sup>

De conformidad con la reciente recomendación del Comité Selecto Conjunto sobre Derechos Humanos, Igualdad y Diversidad sobre el Tratamiento de las Personas Detenidas en el Centro de Detención de Inmigrantes de Trinidad y Tobago,<sup>9</sup> pedimos encarecidamente a su gobierno que apruebe una legislación nacional sobre las personas refugiadas que esté en consonancia con el derecho y las normas internacionales. Acogemos con satisfacción la intención declarada de preparar la legislación por parte de la Procuraduría General.<sup>10</sup> Además, recordamos a su gobierno que casi todos los Estados de América Latina —incluidos los países a los que también afecta la situación de Venezuela— tienen legislación nacional sobre personas refugiadas, de manera que, aprobando dicha legislación, Trinidad y Tobago se sumaría a la tendencia regional y eso le permitiría liderar adecuadamente la respuesta en la región del Caribe.

Según la información publicada por su oficina, transcurrido el plazo de un año, las personas migrantes registradas “no podrán ampliar el tiempo de estancia en el país [a menos que el Consejo de Ministros decida conceder una prórroga] y serán obligadas a regresar a Venezuela”.<sup>11</sup>

Amnistía Internacional desearía obtener información adicional sobre las opciones disponibles para las personas solicitantes de asilo y quienes tienen reconocida la condición de refugiado una vez que haya expirado el periodo de amnistía de un año. Recordamos a su gobierno que las personas refugiadas y solicitantes de asilo están

---

<sup>5</sup> Oficina del Primer Ministro de la República de Trinidad y Tobago, “Venezuelan Registration Policy Gets Green Light”, disponible en:

<https://www.opm.gov.tt/venezuelan-registration-policy-gets-green-light/>

<sup>6</sup> Latin America and the Caribbean: Venezuelan refugees & migrants in the region, enero de 2019, disponible en:

<https://data2.unhcr.org/es/documents/download/68069>

<sup>7</sup> Oficina del Primer Ministro de la República de Trinidad y Tobago, “Venezuelan Registration Policy Gets Green Light”, disponible en:

<https://www.opm.gov.tt/venezuelan-registration-policy-gets-green-light/>

<sup>8</sup> Véase <https://data2.unhcr.org/es/situations/vensit>

<sup>9</sup> Véase *Tenth Report of the Joint Select Committee on Human Rights, Equality and Diversity on the Treatment of Detainees at the Immigration Detention Centre*, disponible en: <http://www.ttparliament.org/reports/p11-s4-J-20190215-HRED-R10.pdf>.

<sup>10</sup> *The Ministry of Attorney General and Legal Affairs Ministerial Response. The Tenth Report of the Joint Select Committee on Human Rights, Equality and Diversity on the Treatment of Detainees at the Immigration Detention Centre*, disponible en:

<http://www.ttparliament.org/reports/p11-s4-J-20190430-HRED-r10-mr-MAGLA.pdf>

<sup>11</sup> Oficina del Primer Ministro de la República de Trinidad y Tobago, “Venezuelan Registration Policy Gets Green Light”, disponible en:

<https://www.opm.gov.tt/venezuelan-registration-policy-gets-green-light/>



protegidas frente a su devolución a un país donde su vida o su libertad puedan peligrar por motivos de raza, religión, nacionalidad, ideología política o pertenencia a un grupo social concreto. Por tanto, la deportación de personas que figuran en registros del ACNUR sería contraria al derecho internacional.

Basándose en información publicada recientemente por el Ministerio de Comunicaciones, Amnistía Internacional entiende asimismo que el proceso de registro es obligatorio.<sup>12</sup> Nos gustaría recibir información sobre la situación en la que quedarán las personas que no se inscriban, así como las personas venezolanas no registradas por el ACNUR una vez transcurrido el plazo de un año. Además, hemos sabido que se obligará a las personas migrantes a presentar diversos documentos, incluidos certificados de nacimiento, tarjetas de identificación y pasaportes, entre otros. En su investigación en la frontera de Venezuela con Colombia, Amnistía Internacional descubrió que personas venezolanas refugiadas y migrantes que necesitaban protección internacional no tenían pasaporte, y por ello nos preocupa que muchas no puedan presentar la documentación requerida.<sup>13</sup>

Hemos sabido, además, que hay niñas y niños refugiados y solicitantes de asilo venezolanos que actualmente no tienen acceso a la educación pública en Trinidad y Tobago, a pesar de que el país ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño y es Estado Parte en la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, que, en su artículo 22, exige que los Estados proporcionen a las personas refugiadas “el mismo trato que a los nacionales en lo que respecta a la enseñanza elemental”. Según la información que Amnistía Internacional ha podido obtener, el proceso de registro propuesto no garantiza el derecho a la educación de las personas venezolanas. De conformidad con nuestras recomendaciones a otros países de la región, y con la propia política sobre personas refugiadas de Trinidad y Tobago,<sup>14</sup> Amnistía Internacional recomienda encarecidamente a Trinidad y Tobago que facilite el acceso a escuelas públicas de las niñas y niños refugiados de Venezuela y otros países.

### ***El principio de no devolución (non-refoulement) para las personas que llegan por mar***

Amnistía Internacional ve asimismo con preocupación una serie de informes publicados recientemente en medios de comunicación<sup>15</sup> que parecen indicar que las autoridades de Trinidad y Tobago han obligado a dar la vuelta a barcos que transportaban a migrantes y solicitantes de asilo venezolanos que intentaban entrar legalmente. Como ya se ha planteado a su gobierno anteriormente,<sup>16</sup> el principio de no devolución (*non-refoulement*) prohíbe a los Estados trasladar a personas a otro país o jurisdicción donde puedan correr un peligro real de sufrir graves abusos o violaciones de derechos humanos, y es vinculante para todos los Estados como parte del derecho internacional consuetudinario. Según el derecho internacional, cuando un Estado establece un control efectivo sobre un barco, ese estado es responsable de asegurar y proteger los derechos humanos,<sup>17</sup> lo que incluye permitir el acceso al procedimiento de concesión de asilo si la persona asegura que teme volver a su país.<sup>18</sup> Por tanto, si fuera cierto que las autoridades de Trinidad y Tobago están obligando a dar la vuelta a barcos que transportan a personas venezolanas, podrían estar incumpliendo el principio de no devolución (*non-refoulement*).<sup>19</sup>

<sup>12</sup> Ministerio de Comunicaciones, Preguntas frecuentes sobre el proceso de registro de migrantes venezolanos.

<sup>13</sup> Véase: <http://www.amnistiaonline.org/SaludadeEmergencia/Default/Quedarse/>; consulten también las obligaciones contraídas por Trinidad y Tobago en virtud del artículo 31 de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados.

<sup>14</sup> *Trinidad and Tobago: A phased approach towards the establishment of a national policy to address refugee and asylum matters in the Republic of Trinidad and Tobago*, disponible en: <https://www.refworld.org/docid/571109654.html>

<sup>15</sup> CNC3, “100 illegal Venezuelans arrested, ferries barred from docking in Cedros”, 8 de mayo de 2019, disponible en: <https://www.cnc3.co.tt/press-release/100-illegal-venezuelans-arrested-ferries-barred-docking-cedros>; *Trinidad and Tobago Guardian*, “Another Venezuelan boat denied T&T entry”, 9 de mayo de 2019, disponible en: <http://www.guardian.co.tt/news/another-venezuelan-boat-denied-tt-entry-6.2.841877.c26ac6da6d>

<sup>16</sup> Amnistía Internacional, Carta abierta a Keith Christopher Rowley, primer ministro de Trinidad y Tobago (AMR 49/8270/2018)

<sup>17</sup> Artículo 2.1 del PIDCP. Trinidad y Tobago es Estado Parte en él desde 1978.

<sup>18</sup> Véase ACNUR, *Salvamento en el mar*, disponible en: [https://www.acnur.org/es-es/publications/pub\\_prot/5c1bfbd54/salvamento-en-el-mar-una-guia-sobre-los-principios-y-practicas-aplicables.html](https://www.acnur.org/es-es/publications/pub_prot/5c1bfbd54/salvamento-en-el-mar-una-guia-sobre-los-principios-y-practicas-aplicables.html)

<sup>19</sup> La Comisión de Derecho Internacional, cuyo mandato es codificar el derecho internacional consuetudinario o su desarrollo progresivo, ha adoptado recientemente un proyecto de Convención sobre los crímenes de lesa humanidad. Al hacerlo, concluye lo siguiente: “La Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951 prevé excepciones a la obligación de no devolución para permitir que esta se produzca cuando la persona haya cometido un delito o represente un riesgo grave para la seguridad. No obstante, desde entonces, los tratados no han recogido esas excepciones, y entienden que la obligación tiene carácter absoluto. La Comisión consideró apropiado que el proyecto de artículo 5 no contuviera esa excepción”, Doc. ONU A/72/10, 2017, p.73.



Por último, pedimos a su gobierno que trabaje con todo el sistema de la ONU, las organizaciones de derechos humanos, la sociedad civil y el mundo académico de Trinidad y Tobago, para buscar soluciones basadas en los derechos humanos para las personas refugiadas y migrantes venezolanas que se ven obligadas a exponerse a grandes riesgos<sup>20</sup> para solicitar refugio en Trinidad y Tobago. Amnistía Internacional está plenamente a su disposición para ofrecer orientación a su gobierno sobre el cumplimiento de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Atentamente,

**Erika Guevara Rosas**  
Directora para las Américas

---

<sup>20</sup> ACNUR, “Temor por los venezolanos desaparecidos en un naufragio en el Caribe”, 26 de abril de 2019; *Washington Post*, “Venezuelan migrants missing after 2nd sea tragedy in a month”, 20 de mayo de 2019.